



República de Colombia  
**Corte Suprema de Justicia**  
Sala de Casación Civil

**AC4508-2021**

**Radicación n. 11001-02-03-000-2021-02153-00**

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Se decide el conflicto de competencia que surgió entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda) y el despacho Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar (Bolívar), atinente al conocimiento de la acción popular instaurada por Sebastián Colorado contra el Banco Davivienda S.A.

## **I. ANTECEDENTES**

1. En defensa del bien colectivo, el demandante interpuso acción popular en contra de la aludida entidad, argumentando que *«(...) no Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios públicos, con un intérprete profesional ni con un guía interprete profesional, que describa el inmueble a la población objeto ley 982 de 2005, tal como lo ordena ley 982 de 2005, art 8»*.

Asimismo, tras pregonar que *«la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO»*, precisó que el sitio de la vulneración y amenaza acaece en *«el Carmen de Bolívar – Bolívar / Calle 24 No. 49-14 Plaza Principal»*. Además, resaltó que las *«notificaciones»* del *«accionado»* se han de efectuar en la *«Calle 7 Nro 7 16 la Virginia Rda»*.

A partir de la anterior denuncia, el gestor solicitó a la judicatura ordenar a la sociedad accionada que *«contrate de planta*

*un profesional interprete y un profesional guía interprete de planta en el inmueble de la entidad accionada a fin de cumplir ley 982 de 2005, art 8 en un término NO MAYOR A 30 DIAS o contrate con entidad idónea CERTIFICADA por el ministerio de educación nacional»; adicionalmente «Se concedan COSTAS»; entre otras<sup>1</sup>.*

2. El escrito inicial fue asignado al despacho Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda-, el cual, a través de proveído de 12 de enero de 2021, admitió la demanda<sup>2</sup>. Posteriormente, por auto de 15 de abril de la misma anualidad, la rechazó de plano por falta de competencia. En consecuencia, remitió el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de El Carmen de Bolívar - Bolívar (reparto), en tanto consideró, que

*«(...) observa el Despacho que en un principio no debió ser admitida la presente acción popular por carecer de competencia para conocer sobre la misma, dada cuenta que la parte accionada es el Banco Davivienda de la CALLE 24 N° 49-14 PLAZA en EL CARMEN DE BOLIVAR - BOLIVAR. (...)*

*En torno a este tema, se han suscitado innumerables conflictos de competencia resueltos incluso por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria civil, Corporación que en uno de sus más recientes pronunciamientos dejó completamente claro que en tratándose de asuntos constitucionales, la norma especial debe concatenarse con la general, para llegar a la conclusión que el fuero para fijar la competencia es concurrente y que solo puede asumir el conocimiento el juez del domicilio principal de la entidad demandada o el del lugar donde se está produciendo la vulneración, con lo que se atiende el mandato procedimental acerca de que cuando el asunto está vinculado a una determinada sucursal, debe ser el juez donde está ubicada la misma quien provea sobre la cuestión y así garantizar el fundamental derecho a la defensa del demandado y la distribución equitativa del trabajo entre los diferentes jueces de la República. (...)*

*No es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporación y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aquí se asuma la competencia para conocer de la presente acción popular, pues La Virginia – Risaralda, no es el sitio donde está ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se está produciendo la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados»<sup>3</sup>.*

---

<sup>1</sup> Folio 1 y 2, archivo “01. CARMEN DE BOLIVAR” del expediente digital

<sup>2</sup> Folios 1 y 2, archivo “02. 2020-00351 ADMITE AP EL CARMEN BOLIVAR” del expediente digital.

<sup>3</sup> Folios 1-6, archivo “04. 2020-00351 DECLARA NULIDAD, RECHAZA POR COMPETENCIA” del expediente digital.

3. Contra la anterior decisión, el actor interpuso diversos medios de impugnación amparado en el «art 318 CGP, frente al auto que decreta nulidad y rechaza por competencia desconociendo la jurisdicción perpetua, inaplicación de normas de orden público, vencimiento de términos para que la parte actora se pronuncie, inmutabilidad de la acción entre otras mas normas legales y procesales de ORDEN PUBLICO»<sup>4</sup>.

4. Por auto de 29 de abril de 2021, la autoridad judicial de La Virginia desató el recurso horizontal propuesto, resolviendo «no reponer los autos del 16 de abril de 2021 (...)»<sup>5</sup>.

5. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al despacho Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, quien en proveído del 10 de junio hogaño admitió la acción<sup>6</sup>; no obstante, en respuesta al memorial presentado por el actor donde solicitaba la nulidad de la referida admisión por violar la «jurisdicción perpetua»<sup>7</sup>, en auto del día 17 del mismo mes la autoridad judicial dejó sin efecto la mentada providencia, se declaró incompetente para conocer el proceso y promovió el conflicto de competencia que ocupa la atención de la Corte. Para ello, expresó que

*«(...) observa este despacho que, al haber sido admitida la acción popular mediante providencia del 12 de enero de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia - Risaralda, no podía, posteriormente, ser rechazado el conocimiento de tal causa por factores diferentes al subjetivo y funcional, como, efectivamente, sucedió en este asunto, pues la instancia judicial, motu proprio, repelió, equivocadamente, la competencia por el factor territorial luego de haberla asumido.*

*Ahora, si bien es cierto que este despacho admitió la presente acción popular, proveniente del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda, no podrían dejarse pasar por alto los planteamientos de*

---

<sup>4</sup> Folio 1, archivo “07. Recurso Sebastian Colorado 2020-00301 a 492” del expediente digital.

<sup>5</sup> Folios 1-4, archivo “08. Resuelve recurso AP 2020-00403 a 2020-00492” del expediente digital.

<sup>6</sup> Folios 1 y 2, archivo “13. 2021-00042 ADMISION - ACCION POPULAR SEBASTIAN COLORADO VS DAVIVIENDA” del expediente digital.

<sup>7</sup> Folio 1, archivo “15 MEMORIAL ALLEGADO EL 16-06-2021” del expediente digital

*improrrogabilidad de la competencia del artículo 16 del C.G.P. y el antecedente jurisprudencial citado.*

*Como quiera que el Juez tiene la facultad de realizar control de legalidad y que “los autos ilegales no atan al juez”, procederá esta Judicatura a dejar sin efecto el auto admisorio dictado en la presente causa de fecha 10 de junio del año 2021 y en su lugar se abstendrá de asumir la competencia del presente asunto conforme lo brevemente expuesto, para en su lugar elevar el respectivo conflicto de competencia conforme a las previsiones del artículo 139 del C.G.P., remitiendo las diligencias a la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de dos juzgados de diferente distrito judicial<sup>8</sup>.*

6. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.

## **II. CONSIDERACIONES**

1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Risaralda y Bolívar, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los artículos 139 *ibidem* y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.

2. El ordenamiento jurídico establece factores de competencia para definir a qué funcionario judicial le corresponde el conocimiento de determinado asunto. Tales criterios, incluso, pueden ser concurrentes.

3. Tratándose de acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que «será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se subraya).

La Corte en un pronunciamiento que guarda simetría con el aquí analizado, tuvo ocasión de señalar que:

---

<sup>8</sup> Folios 1-3, archivo “21 AUTO PROPONE CONFLICTO DE COMPETENCIA RAD. 2021-00042” del expediente digital.

*«[L]a reseñada norma consagra un evento de “conurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor Territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (...), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante». (CSJ AC013-2016, 12 ene. 2015, rad. 2015-03159).*

El anterior lineamiento, atribuye al actor popular la facultad de definir ante que autoridad jurisdiccional ventila el asunto. Teniendo como derroteros, el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado -a prevención del gestor-. Una vez materializada dicha escogencia, resulta vinculante para el funcionario ante el cual se efectúa.

4. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que el promotor indicó en su escrito inicial que el domicilio de la sociedad atacada era el municipio de La Virginia -Risaralda-, lugar donde finalmente presentó la acción de la referencia, por tanto, resulta evidente que la escogencia del foro realizada se encuentra avalada dentro de los preceptos del factor territorial. No pudiendo por tanto el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia apartarse del conocimiento de la mentada acción.

En el punto, esta Corporación ha considerado que:

*«(...) Al juzgador, ‘en línea de principio, le está vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumió, pues una vez admitida la demanda, sólo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del*

*proceso. Dicho de otro modo, ‘en virtud del principio de la «perpetuatio jurisdictionis», una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendió el conocimiento del asunto. “Si el demandado (...) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le está vedado modificarla (...)» (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00).*

5. Bajo dicha hermenéutica y revisadas las actuaciones jurisdiccionales, se evidencia que el funcionario judicial avocó el trámite de la acción asumiendo de esta manera su competencia. Por tanto, no podía a su arbitrio separarse del conocimiento del asunto, a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, circunstancia que no acaeció.

Sobre el particular la Sala indicó que

*«Una vez el asunto es asignado a un operador judicial, a él le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunción de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los demás de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente»<sup>9</sup>.*

Asimismo, en un caso de análogo temperamento destacó

*«(...) una vez el caso fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, éste se equivocó al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, de manera que se le remitirá para continúe el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada (...)» (CSJ AC2959-2021, 22 jul. rad. 2021-02330-00).*

6. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Despacho Promiscuo del Circuito de La Virginia - Risaralda- para que continúe con el trámite de la acción emprendida.

---

<sup>9</sup> CSJ AC1836-2019

### **III. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO.** Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia es el competente para conocer de la acción popular de la referencia, quien deberá continuar con su trámite.

**SEGUNDO.** Comunicar lo decidido al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar (Bolívar), acompañándole copia de este proveído.

**TERCERO.** Remitir el expediente a la autoridad judicial referida en el numeral primero de esta decisión.

**CUARTO:** Por Secretaría, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**FRANCISCO TERNERA BARRIOS**

Magistrado

## **Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):**

Francisco Ternera Barrios

**Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999**

**Código de verificación: D737855551EE273E9991456BBDF3BDEB6B3AB394D815EE64DB7ECCC95028547D**

**Documento generado en 2021-09-28**